

armamentos y obtuvo de Estados Unidos, junto con una cálida adhesión personal, el levantamiento de las sanciones que la administración anterior había impuesto al país por las violaciones a los derechos humanos. Probablemente fue allí cuando Galtieri concibió su destino de conductor de la Argentina hacia el mundo de las grandes potencias, el Primer Mundo, donde el país—protegido por su poderoso aliado—podría jugar el juego de los grandes.

Designado presidente, Galtieri se lanzó a la política activa e intentó, en forma más enérgica y personal que Viola, armar un movimiento en el que los "amigos políticos" sustentaran su propio liderazgo, mientras anunciaba vagamente, sin fechas ni plazos precisos, la futura institucionalización. Encargó la conducción de la economía a Roberto Alemann, destacado economista del *establishment*, quien rodeado de buena parte del equipo de Martínez de Hoz retornó a la senda inicial, y de acuerdo con las nuevas circunstancias creadas por la crisis y la deuda, definió sus prioridades en torno de "la desinflación [sic], la desregulación y la desestatización". En lo inmediato, la recesión se agudizó, y con ella las protestas de sindicatos y empresarios; para el largo plazo, anunció un plan de privatizaciones, particularmente del subsuelo, que suscitó resistencias incluso en sectores del gobierno. Así, el ímpetu de Galtieri chocó pronto con resistencias cada vez más enconadas, con voces cada vez más altisonantes, y hasta con movilizaciones callejeras, como la lanzada por la CGT el 30 de marzo de 1982.

Fue en ese contexto cuando se concibió y lanzó el plan de ocupar las islas Malvinas, que aparecía como la solución para los muchos problemas del gobierno. La Argentina reclamaba infructuosamente a Inglaterra esas islas desde 1833, cuando fueron ocupadas por los británicos. En 1965 las Naciones Unidas habían dispuesto que ambos países debían negociar sus diferencias, pero los británicos poco habían hecho para avanzar en el sentido de los reclamos argentinos, coincidentes con las tendencias generales del mundo hacia la descolonización. Existía, pues, un reclamo nacional unánime en su fondo, aunque no en las formas y medios para lograrlo. Desde la perspectiva de los militares, una acción militar que condujera a la recuperación de las islas permitiría unificar a las Fuerzas Armadas tras un objetivo común y ganar, de un golpe, la cuestionada legitimidad ante una sociedad visiblemente disconforme.

Una acción militar tendría una segunda ventaja: posibilitaría encontrar una salida al atoladero que había creado la cuestión con Chile por el canal del Beagle. En 1971, los presidentes Lanusse y Allende habían acordado someter a arbitraje la cuestión de la posesión de tres islotes que dominan el paso por aquel canal, que une los océanos Atlántico y Pacífico. En 1977, el laudo arbitral los otorgó a Chile, y el gobierno argentino lo rechazó. En 1978, ambos

países parecían dispuestos a dirimir la cuestión por las armas cuando, casi en el último minuto, decidieron aceptar la mediación del Papa, por intermedio del cardenal Samoré. A fines de 1980, el Vaticano comunicó reservadamente su propuesta, que en lo sustantivo mantenía lo establecido en el laudo, y el gobierno argentino—imposibilitado tanto de rechazarla como de aceptarla—optó por dilatar la respuesta y retomar la situación de activa hostilidad con Chile.

Por entonces había cobrado forma definida entre los militares y sus amigos una corriente de opinión belicista, que arraigaba en una veta del nacionalismo argentino y se alimentaba con vigorosos sentimientos chauvinistas. Diversas fantasías largamente acuñadas en el imaginario histórico de la sociedad —la "patria grande", los "despojos" de los que el país había sido víctima—se sumaban a la nueva fantasía de "entrar en el Primer Mundo" mediante una política exterior "fuerte". Todo ello se sumaba al ya tradicional mesianismo militar y a la ingenuidad de sus estrategias, ignorantes de los datos más elementales de la política internacional. La agresión a Chile, bloqueada por la mediación papal, fue desplazada hacia Gran Bretaña, el tradicional imperio, que se suponía viejo y achacoso. Ya en 1977, la Marina había planteado la propuesta de ocupar las islas, vetada por Videla y Viola, que retomó apenas Galtieri asumió la presidencia. La idea era sencilla y atractiva. Luego del golpe de mano, que presentaba pocas dificultades, se contaba con el apoyo norteamericano y la reluctante reacción de Gran Bretaña, que finalmente admitiría la ocupación, a cambio de todas las concesiones y compensaciones necesarias. En ninguna de las hipótesis entraba la posibilidad de una guerra.

El 2 de abril de 1982, las Fuerzas Armadas desembarcaron y ocuparon las Malvinas, luego de vencer la débil resistencia de las escasas tropas británicas. El hecho, sorprendente para casi todos, suscitó un amplio apoyo: la gente se reunió espontáneamente en la Plaza de Mayo, y volvió a hacerlo; en forma multitudinaria, allí y en las capitales provinciales, cuando fue convocada, una semana después, en ocasión de la visita del secretario de Estado norteamericano Alexander Haigh. Ese día el presidente Galtieri tuvo la satisfacción de arengar a la multitud desde el histórico balcón. Todas las instituciones de la sociedad —colectividades extranjeras, clubes deportivos, asociaciones culturales, sindicatos, partidos políticos—manifestaron su adhesión sin reserva. Los dirigentes políticos viajaron, junto con los jefes militares, para asistir a la asunción del nuevo gobernador militar de las islas, general Mario Benjamín Menéndez, y a la imposición de su nuevo nombre a su capital, Puerto Stanley, rebautizada como Puerto Argentino. Los dirigentes de la CGT, que habían sido fuertemente

En los años en que Martínez de Hoz condujo la economía, el Estado realizó importantes obras públicas—desde autopistas a una nueva central eléctrica atómica—para las que contrató a empresas de construcción o de ingeniería. Por otra parte, las empresas del Estado adoptaron como estrategia privatizar parte de sus actividades, contratando con terceros el suministro de equipos—como con los teléfonos—o la realización de tareas, como hizo YPF en las tareas de extracción, y en torno de esas actividades se constituyeron algunas de las más poderosas empresas nuevas. Las empresas contratistas del Estado se beneficiaron primero con las condiciones pactadas y luego con el mecanismo de ajustar los costos al ritmo de la inflación que, dada la magnitud de ésta y las dificultades del gobierno para cumplir puntualmente con sus compromisos, terminaba significando un beneficio mayor aún que el de la obra misma. Otras empresas aprovecharon los regímenes de promoción, que aunque en general se redujeron, continuaron existiendo para proyectos específicos. Esos regímenes posibilitaban importantes reducciones impositivas, avales para créditos baratos, seguros de cambio para los créditos en dólares, monopolización del mercado interno, decisivo en el caso del papel de diario, o suministro de energía a bajo costo, muy importante para las acerías o la fábrica de aluminio. De ese modo muchos grupos empresarios, a menudo sin experiencia importante en el campo, podían constituir su capital con mínimos aportes propios.

Esta política implicaba notables excepciones respecto de las políticas más generales, en beneficio de empresarios específicos, y era el resultado de capacidades también específicas para negociar con el Estado, obtener ventajas en los contratos, mecanismos adicionales de promoción, concesiones en los acuerdos por "mayores costos", todo lo cual era el resultado de nuevas formas de colusión de intereses. Gracias a ellos, estos grupos pudieron crecer sin riesgos, al amparo del Estado, y en un contexto general de estancamiento. Acumularon una fuerza tal, que en el futuro, resultaría muy difícil revertir las condiciones en que actuaban, y junto con los acreedores extranjeros se convirtieron en los nuevos tutores del Estado.

Achicar el Estado y silenciar a la sociedad.

La reducción de funciones del Estado, su conversión en "subsidiario", fue uno de los propósitos más firmemente proclamados por el ministro Martínez de Hoz, recogiendo un argumento que circulaba con fuerza creciente en todo el mundo capitalista, donde estaban en plena revisión los principios del Esta-

do dirigista y benefactor, constituido en la Argentina, sucesivamente, en 1930 y en 1945. Tradicionalmente defendido por los sectores rurales, el liberalismo económico nunca había encontrado eco ni entre los empresarios—generalmente beneficiarios del apoyo estatal—ni entre los militares, en quienes pesaba mucho la impronta del estatismo y la autarquía. El ministro obtuvo una importante victoria argumentativa cuando logró ensamblar la prédica de la lucha antisubversiva con el discurso contra el Estado, e incluso contra el industrialismo. Un Estado fuerte y regido democráticamente resultaba un peligroso instrumento si estaba, aunque fuera parcialmente, en manos de los sectores populares, como lo mostraba la experiencia peronista; pero aun sin ser democrático, generaba inevitablemente relaciones espurias entre grupos de empresarios y sindicatos, lo que por otra vía llevaba al mismo resultado. La historia de las últimas cuatro décadas ofrecía abundantes ejemplos para este argumento, que implícitamente terminaba encontrando la raíz del poder de los trabajadores—el gran obstáculo para lo que se estimaba un funcionamiento normal de la sociedad—en el desarrollo industrial, artificial y subsidiado por la sociedad a través del Estado. La panacea consistía en reemplazar la dirección del Estado por la del mercado—automático, limpio, impersonal—, que mediante la racional asignación de recursos, de acuerdo con la eficiencia de cada uno, destruiría toda posibilidad de colusión entre corporaciones. Paradójicamente, el ministro se propuso utilizar todo el poder del Estado para imponer por la fuerza la receta liberal y redimensionar al Estado mismo.

Así, buena parte de la política de Martínez de Hoz entre 1976 y 1981, cuando el gobierno militar pudo operar con escasas resistencias, tuvo como propósito desmontar los instrumentos de dirección, regulación y control de la economía que se habían construido desde 1930: el control de cambios, la regulación del crédito y la tasa de interés, y la política arancelaria. Cuando la influencia del ministro declinó, y el gobierno todo se vio sumido en una crisis, correspondió a los acreedores externos la vigilancia y presión sobre los gobiernos para que mantuvieran la política de apertura y liberalización. Como buena parte de los militares eran reacios a que el Estado se desprendiera de las empresas de servicios públicos o de aquellas otras ligadas con sus criterios de autarquía, la política fue en ese terreno menos directa, combinando una descalificación genérica—se afirmaba que el Estado las administra ineficientemente—con su deliberada corrupción y destrucción: los mejores cuadros de su administración fueron alejados por los bajos sueldos, se toleró todo tipo de colusiones con los dirigentes sindicales, y las bajas tarifas que se establecieron crearon un desastre financiero, agravado posteriormente por la re-

currencia sistemática a créditos externos. La llamada privatización periférica, realizada sin control ni regulación alguna, permitió crecer a su costa a los competidores privados —con frecuencia sus directivos eran puestos al frente de las empresas públicas— y capacitarlos en un negocio en el cual la empresa estatal les transfería su larga experiencia. Así las empresas de servicios, hasta entonces relativamente eficientes, se deterioraron, se endeudaron y sirvieron para hacer crecer a las contratistas privadas, mientras que por otra parte el Estado se hacía cargo de infinidad de empresas y bancos quebrados por obra de su política económica.

Se trataba de una manera paradójica de achicar el Estado. El ministro liberalizador ejerció una verdadera dictadura sobre la economía, conducida con una unidad de criterio que contrastaba con la anárquica fragmentación del poder militar. La libertad de mercado se construía por la fuerza, y la violencia era la *ultima ratio*. Pero si ése era el verdadero objetivo, los resultados fueron no sólo magros sino hasta exactamente contrarios. Antes que estimular la eficiencia, el Estado premió a los que sabían obtener de él distintos tipos de prebendas, por mecanismos no demasiado diferentes de los que se había criticado, aunque naturalmente el actor sindical había sido eliminado. Ni siquiera mejoró la eficiencia del Estado en el campo que le era intrínseco e intransferible: la recaudación y asignación de recursos fiscales. Pese a la proclamada aspiración a lograr el equilibrio presupuestario, central desde la perspectiva adoptada para contener la inflación, el gasto público creció en forma sostenida, alimentado primero con la emisión y luego con el endeudamiento externo. Una parte importante tuvo como beneficiario directo a las Fuerzas Armadas, que se reequiparon con vistas al conflicto con Chile primero y con Gran Bretaña por las Malvinas después, y otra también considerable se destinó a programas de obras públicas de dimensión faraónica. Los espacios para las negociaciones espurias se multiplicaron debido a que las tres Fuerzas Armadas se repartieron prolijamente la administración del Estado y la ejecución de las obras públicas, multiplicando las demandas de recursos. Se gastaba por varias ventanillas a la vez, sin coordinación entre ellas —un aspecto más de la falta de unidad de conducción política—, lo que sumado a la inflación, que tornaba imprevisible lo que efectivamente cada uno recibiría, hizo borrosa la misma existencia de un presupuesto del Estado.

El Estado se vio afectado de forma más profunda aún. El llamado Proceso de Reorganización Nacional supuso la coexistencia de un Estado terrorista clandestino, encargado de la represión, y otro visible, sujeto a normas, establecidas por las propias autoridades revolucionarias pero que sometían sus acciones a una cierta juridicidad. En la práctica, esta distinción no se mantu-

vo, y el Estado ilegal fue corroyendo y corrompiendo al conjunto de las instituciones del Estado y a su misma organización jurídica.

La primera cuestión oscura era dónde residía realmente el poder, pese a que la tradición política del país era fuertemente presidencialista, y a que la unidad de mando fue siempre uno de los principios de las Fuerzas Armadas, la autoridad del presidente —al principio el primero entre sus pares, y luego ni siquiera eso— resultó diluida y sometida a permanente escrutinio y limitación por los jefes de las tres armas. El Estatuto del Proceso y las actas institucionales complementarias —que suprimieron el Congreso y depuraron la Justicia y prohibieron la actividad política— crearon la Junta Militar, con atribuciones para designar al presidente y controlar una parte importante de sus actos, pero las atribuciones respectivas de una y otra no quedaron totalmente deslindadas, y fueron más bien el resultado del cambiante equilibrio de fuerzas. También se creó la Comisión de Asesoramiento Legislativo, para discutir las leyes, integrada por tres representantes de cada arma, que obedecían órdenes de sus mandos, de modo que dicha comisión se convirtió en una instancia más de los acuerdos y confrontaciones. Cada uno de los cargos ejecutivos, desde gobernadores a intendentes, así como el manejo de las empresas del Estado y demás dependencias, fue objeto del reparto entre las fuerzas, y quienes los ocupaban dependían de una doble cadena de mandos: del Estado y de su Arma, de modo que el conjunto pudo asimilarse a la anarquía feudal antes que a un Estado cohesionado en torno del poder.

La misma anarquía existió respecto de las normas legales que el propio gobierno se daba. Como demostró Enrique Groisman, existió confusión sobre su naturaleza —se mezclaron sin criterio leyes, decretos y reglamentos—, sobre quién las dictaba y sobre su alcance. Hubo una notoria reticencia a explicitar sus fundamentos, y en ocasiones hasta se mantuvo en secreto su misma existencia. Se prefirieron las normas legales omnicomprendivas, y habitualmente se otorgaron facultades amplias a los órganos de aplicación, pero además se toleró su permanente violación o incumplimiento. Contaminado por el Estado terrorista clandestino, todo el edificio jurídico de la República resultó así afectado, al punto que prácticamente no hubo límites normativos para el ejercicio del poder, que funcionó como potestad omnímoda del gobernante. La corrupción se extendió a la administración pública, de la que fueron apartados los mejores elementos: los criterios de arbitrariedad fueron asumidos por los funcionarios inferiores, convertidos en pequeños autócratas sin control, y a la vez sin capacidad para controlar.

En suma, la Reorganización no se limitó a suprimir los mecanismos democráticos constitucionales o a alterar profundamente las instituciones re-

publicanas, como había ocurrido con los regímenes militares anteriores. Desde dentro mismo se realizó una verdadera revolución contra el Estado, afectando la posibilidad de ejercer incluso aquellas funciones de regulación y control que, según las concepciones liberales, le eran propias.

La fragmentación del poder, las tendencias centrífugas y la anarquía derivaban de la escrupulosa división del poder entre las tres fuerzas, al punto de no existir una instancia superior a ellas que dirimiera los conflictos, pero también de la existencia de definidas facciones en el propio Ejército, donde con la represión surgieron verdaderos señores de la guerra, que casi no reconocían autoridad sobre sí. En torno de los generales Videla y Viola —su segundo en el Ejército—, se constituyó la facción más fuerte, pero que distaba de ser dominante. Estos jefes respaldaban a Martínez de Hoz —muy criticado por los militares más nacionalistas, que abundaban entre los cuadros jóvenes— pero reconocían la necesidad de encontrar en el futuro alguna salida política; mantenían comunicación con los dirigentes de los partidos políticos, que se ilusionaban creyendo ver en ellos al sector más civilizado y hasta progresista de los militares, quizá porque reconocían la necesidad de regular de alguna manera la represión.

Otro grupo, cuyas figuras más preeminentes eran los generales Luciano Benjamín Menéndez y Carlos Suárez Mason, comandantes de los cuerpos de Ejército III y I, con sede en Córdoba y Buenos Aires, a los que se asociaba el general Ramón J. Camps, jefe de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y figura clave en la represión, afirmaban que la dictadura debía continuar *sine die*, y que la represión —que ejecutaban de manera especialmente sanguiñaria— debía llevarse hasta sus últimas consecuencias. En conflicto permanente con el comando del arma —con Videla y sobre todo con Viola— Menéndez se insubordinó de hecho varias veces —en ocasión del conflicto con Chile en 1978 estuvo a punto de iniciar la guerra por su cuenta— y en forma explícita una vez, en 1979, que forzó su retiro.

El tercer grupo lo constituyó la Marina de Guerra, firmemente dirigida por su comandante Emilio Massera, quien confiando en sus talentos políticos se propuso encontrar una salida que legitimara popularmente al Proceso, y a la vez lo llevara a él mismo al poder. Massera —que desde la Escuela de Mecánica de la Armada ejerció una parte importante de la represión y ganó sus méritos en esa tenebrosa competencia— desarrolló siempre un juego propio; jaqueó a Videla, para acotar su poder, y tomó distancia de Martínez de Hoz. Se preocupó por encontrar banderas para lograr alguna adhesión popular al gobierno: el Campeonato Mundial de Fútbol —disputado en el país en 1978, y cuya organización fue presidida por el almirante Lacoste— y luego el

conflicto con Chile, que prelude la guerra de Malvinas, también promovida por la Armada. Cuando pasó a retiro, Massera montó una fundación de estudios políticos, un diario propio, un centro de promoción internacional en París, un partido —de la democracia social— y hasta un fantástico *staff* integrado por miembros de las organizaciones armadas secuestrados en la Escuela de Mecánica y que, en lugar de ser ejecutados, accedían a colaborar en los proyectos políticos del almirante.

La puja era sin duda mucho más compleja, pero poco manifiesta. El grupo de Videla y Viola fue avanzando gradualmente en el control del poder, pero en mayo de 1978 Massera se anotó un triunfo cuando logró que se separaran las funciones de presidente de la Nación y de comandante en jefe del Ejército, pese a que Videla fue confirmado como presidente hasta 1981 y Viola lo sucedió como jefe del Ejército. El desplazamiento de Menéndez fue un triunfo importante de Videla, aunque poco después Viola pasó a retiro y lo reemplazó en el mando del Ejército el general Leopoldo Fortunato Galtieri. En septiembre de 1980 Videla pudo imponer en la Junta de Comandantes la designación de Viola como su sucesor, pero a costa de una compleja negociación, que auguró el prolongado jaqueo a que sería sometido el segundo presidente del Proceso.

En suma, podría decirse que la política de orden empezó fracasando con las propias Fuerzas Armadas, pues la corporación militar se comportó de manera indisciplinada y facciosa, y poco hizo para mantener el orden que ella misma pretendía imponer a la sociedad. A pesar de eso, durante cinco años lograron asegurar una paz relativa, como la de los sepulcros, debido a la escasa capacidad de respuesta del conjunto de la sociedad, en parte golpeada o amenazada por la represión y en parte dispuesta a tolerar mucho de un gobierno que, luego del caos, aseguraba un orden mínimo. Sólo hacia el fin del período de Videla, estimulados por el descontento que generó la crisis económica, así como por las crecientes dificultades que encontraba el gobierno militar y sus fuertes disensiones intestinas, las voces de protesta, todavía tímidas y confusas, comenzaron a elevarse.

Esta transición del silencio a la palabra varió según los casos. Los empresarios apoyaron al Proceso desde el comienzo, pero a la distancia. Pese a las coincidencias generales —sobre todo en lo relativo a la política laboral— había desconfianzas recíprocas: los militares atribuían a los empresarios parte de la responsabilidad del caos social que se habían propuesto modificar, y éstos, por su parte, divididos en sus intereses, no eran capaces de formular orientaciones o reclamos claros y homogéneos. Aquellos empresarios específicamente beneficiados todavía no constituían un grupo orgánico, institu-

cionalizado y con voz propia. Las voces corporativas —la Sociedad Rural, la Unión Industrial— criticaban aspectos específicos de las políticas económicas que los afectaban, y algunos generales como la elevada inflación, pero más allá de eso carecían de unidad y fuerza para presionar corporativamente, y sólo empezaron a hacerlo cuando el régimen militar dio, a la vez, signos de debilidad y de disposición a la apertura. El general Viola, buscando tomar distancia de la política de Martínez de Hoz, convocó específicamente a los voceros de los grandes sectores empresarios y los integró en su gabinete, pero la participación concluyó con su caída, y desde entonces los empresarios, muy golpeados por la crisis, fueron integrando con creciente entusiasmo el frente opositor.

El movimiento sindical recibió duros golpes. La represión afectó a los activistas de base y a muchos dirigentes de primer nivel, que fueron encarcelados. Las principales fábricas fueron ocupadas militarmente, hubo "listas negras", para mantener alejados a los activistas, y control ideológico para los aspirantes a empleo. La CGT y la mayoría de los grandes sindicatos fueron intervenidos, se suprimieron el derecho de huelga y las negociaciones colectivas y los sindicatos fueron separados del manejo de las obras sociales. Privados casi de funciones, reducidos como consecuencia de los cambios en el empleo, que afectó sobre todo a los industriales, los sindicatos hicieron oír poco su voz.

El gobierno mantuvo una mínima comunicación con los sindicalistas, casi limitada a la conformación de la delegación que anualmente debía concurrir a la asamblea de la Organización Internacional del Trabajo en Ginebra. Esto les permitió una cierta actividad y algún espacio para denunciar en el exterior las duras condiciones de los trabajadores y, por esa vía, para plantear al gobierno cuestiones acerca de salarios, convenios y huelgas. Los sindicalistas se agruparon, de manera cambiante, en dos tendencias: los dialoguistas y los combativos. En abril de 1979, cuando la represión había menguado algo, los combativos realizaron un paro general de protesta, que los dialoguistas no acataron, y que concluyó con una fuerte represión y prisión para la mayoría de los dirigentes que lo encabezaron. A fines de 1980, los dirigentes más combativos reconstituyeron la CGT y eligieron como secretario general a un miembro poco conocido de un pequeño sindicato: Saúl Ubaldini. En 1981, aprovechando la mayor tolerancia del gobierno, la CGT realizó una nueva huelga general, con consecuencias similares a la de 1979, y en el mes de noviembre una marcha obrera hacia la iglesia de San Cayetano —patrono de los desocupados—, reclamando "pan, paz y trabajo". Por entonces, sus quejas se unían a las de otros sectores, como los estudiantes o algunos grupos de empresarios regionales. Las huel-

gas parciales se hicieron más frecuentes e intensas; el 30 de marzo de 1982, la CGT convocó, por primera vez desde 1975, a una movilización en la Plaza de Mayo, que el gobierno reprimió con violencia: hubo 2 mil detenidos en Buenos Aires y un muerto en Mendoza.

También la Iglesia modificó su comportamiento a medida que el régimen militar empezaba a dar muestras de debilidad. Inicialmente tuvo una actitud complaciente, y a la vez el gobierno estableció una asociación muy estrecha con los obispos, asegurándoles importantes ventajas personales. La jerarquía eclesiástica —con algunas conspicuas excepciones, como el obispo de La Rioja, Angelelli, probablemente asesinado— aprobó la asociación que en sus expresiones públicas los militares hacían entre terrorismo de Estado y virtudes cristianas, calló cualquier crítica, justificó de manera poco velada la llamada erradicación de la subversión atea, y hasta toleró que algunos de sus miembros participaran directamente en ella, según denunció y probó la CONADEP. Pero progresivamente esta respuesta inicial, que revelaba el triunfo del sector local más tradicional, fue dejando paso a otra más elaborada, influida por la orientación conservadora impuesta a la Iglesia romana por el nuevo papa Juan Pablo II. Revisando sus anteriores posiciones, que habían alentado el desarrollo de los sectores progresistas y particularmente de los tercermundistas, la Iglesia se propuso renunciar a la injerencia directa en las cuestiones sociales o políticas y consagrarse a evangelizar y volver a sacralizar una sociedad que se había tornado excesivamente laica. En 1979 el Arzobispado constituyó el equipo de pastoral social, para reconstruir el vínculo entre Iglesia y trabajadores, siguiendo el ejemplo del sindicato polaco Solidaridad, y estrechó relaciones con sindicalistas como Ubaldini. También se ocupó de los jóvenes, para captar y organizar los brotes de nueva religiosidad, manifestos en las concurrencias peregrinaciones a pie a Luján, y llenar el lugar vacante por la desaparición de los activistas que tan intensamente lo habían ocupado en los años anteriores. Las preocupaciones por las cuestiones morales o por la familia se extendían hacia los derechos de las personas, desde la vida hasta el trabajo, y también por las políticas: el documento "Iglesia y comunidad nacional", de 1981, afirmó los principios republicanos, indicó la opción de la Iglesia por la democracia, su apartamiento del régimen militar y su vinculación con los crecientes reclamos de la sociedad.

El más notable de ellos fue el de los derechos humanos. En medio de lo más terrible de la represión, un grupo de madres de desaparecidos —forma con la que comenzó a denominarse a las víctimas del terrorismo de Estado— empezó a reunirse todas las semanas en la Plaza de Mayo, marchando con la cabeza cubierta por un pañuelo blanco, reclamando por la aparición de sus

hijos. Al pedir cuentas, combinando lo dolorosamente testimonial con lo ético, en nombre de principios como la maternidad, que los militares no podían cuestionar ni englobar en la "subversión", atacaron el centro mismo del discurso represivo y empezaron a conmovir la indiferencia de la sociedad. Pronto, las Madres de Plaza de Mayo —víctimas ellas mismas de la represión— se convirtieron en la referencia de un movimiento cada vez más amplio y fueron instalando una discusión pública, fortalecida desde el exterior por la prensa, los gobiernos y las organizaciones defensoras de los derechos humanos. Desde fines de 1981 los militares se vieron obligados a dar alguna respuesta a un tema que pretendían archivar sin discusión, y aunque en general coincidieron en que la cuestión debía darse por concluida, mostraron diferencias y contradicciones que agudizaron sus anteriores disensiones y ampliaron un poco más la brecha por la que la opinión pública, largamente acallada, comenzaba a reaparecer.

Este clima empezó a insuflar algo de vida a los partidos políticos, a los que el régimen militar había prohibido el funcionamiento público. La veda política, impuesta en 1976, congeló la actividad partidaria y a la vez protragó las dirigencias que, carentes de impulsos vitales, tuvieron una actitud escasamente crítica. La prohibición política terminó de hecho en 1981. Los dispersos grupos de derecha fueron convocados para constituir una fuerza política oficialista por el propio gobierno, que ensayó su apertura política, mientras peronistas y radicales entablaron conversaciones con otros partidos menores que culminaron, a mediados de 1981, con la constitución de la Multipartidaria, integrada por el radicalismo, el peronismo, y otros partidos: el desarrollismo, la democracia cristiana y los intransigentes. Esta organización no tenía mayor vitalidad que la escasa de los partidos que la integraban. Se trataba de organizaciones anquilosadas y escasamente representativas, cuyos dirigentes eran los mismos de 1975. Ricardo Balbín, el veterano político radical que animó este intento, murió en 1981 —su entierro convocó la primera gran manifestación callejera de esos años—, poniendo más en evidencia la vacancia de dirección del incipiente movimiento. Los partidos se comprometían a no colaborar con el gobierno en una salida electoral condicionada ni a aceptar una democracia sometida a la tutela militar. Se trataba de un acuerdo mínimo, revelador de las dificultades para plantear alternativas políticas que movilizaran la opinión. Pero también ellos, progresivamente, fueron elevando su tono, se reclamaron los únicos depositarios de la legitimidad política, e incorporaron las protestas de empresarios y sindicalistas o las vinculadas con los derechos humanos, aunque cuidando de dejar abierta la puerta para una salida concertada. Junto con las otras voces —sindicalistas, empresarios, estudiantes, religiosos, intelectuales, y sobre

todo defensores de derechos humanos— fueron formando un coro que a principios de 1982 era difícil de ignorar.

La guerra de Malvinas y la crisis del régimen militar

Desde 1980 los dirigentes del Proceso discutían la cuestión de la salida política. Les preocupaba la crisis económica, el aislamiento, la adversa opinión internacional —en la que pesaban cada vez más los reclamos por los derechos humanos, que el gobierno intentaba minimizar tachándolos de "campaña antiargentina"—, y sobre todo los enfrentamientos intestinos, que a la vez dificultaban los acuerdos necesarios para la salida buscada. Las disidencias se habían manifestado públicamente con la designación de Viola —a la que se opuso la Marina—, se agudizaron en el largo período que medió hasta su asunción, en marzo de 1981, y maduraron cuando fue evidente la decisión del nuevo presidente de modificar el rumbo de la política económica.

Viola procuró aliviar la situación de los empresarios locales, golpeados por la crisis financiera y la violenta devaluación de la moneda —el Estado se hizo cargo de parte de sus deudas— y a la vez trató de concertar la política económica, incorporándolos al gabinete. Tomó contacto con distintos políticos —los "amigos" del Proceso— y discutió con ellos las alternativas para una eventual y lejana transición, pero no logró organizar ningún apoyo consistente, ni tampoco atenuar la crisis económica desencadenada por la violenta devaluación del peso y la acelerada inflación. Lo hostigaban los sectores que habían rodeado a Martínez de Hoz, y distintos grupos militares lo acusaban de falta de firmeza en la conducción. A fines de 1981, una enfermedad de Viola dio la ocasión para su derrocamiento y reemplazo por el general Leopoldo Fortunato Galtieri, que retuvo su cargo de comandante en jefe del Ejército, modificando así la precaria institucionalidad que los mismos jefes militares habían establecido.

Galtieri, un general que a diferencia de Viola era poco ducho en política, se presentó como el salvador del Proceso, el dirigente vigoroso capaz de conducir a una victoria que por entonces parecía remota. En la formación de esa imagen había sido decisiva su reciente estancia en Estados Unidos, donde fue asiduamente cultivado por miembros de la administración de Reagan —que en 1981 había sucedido a Carter—, preocupados por encontrar aliados para su compleja política exterior. Galtieri se manifestó dispuesto a alinear categóricamente al país con Estados Unidos, y a apoyarlo en la guerra encubierta que libraba en América Central. El país contribuyó por entonces con asesores y

reprimidos apenas tres días atrás, trataron de diferenciar su adhesión a la acción de un eventual apoyo al gobierno, pero esta distinción no era fácil de explicar. El gobierno militar había obtenido una cabal victoria política al identificarse con una reivindicación de la sociedad que arraigaba en un profundo sentimiento, alimentado por una tradicional cultura política nacionalista y antiimperialista, que ya parecía archivada pero resurgió vigorosamente. También había captado las formas pueriles y superficiales en que esos sentimientos se manifestaban, el torpe chauvinismo con que se mezclaba, así como el fácil triunfalismo y el belicismo acrítico —fue sorprendente que prácticamente nadie discutiera la licitud de los medios—, revelador de una desintegración de convicciones políticas que otrora habían sido más sólidas y profundas. La sociedad que había festejado el triunfo argentino en el Campeonato Mundial de Fútbol ahora se alegraba de haber ganado una batalla, y con la misma inconciencia se disponía a avanzar, si era necesario, hacia una guerra. Si triunfaban, los militares habrían saldado sus deudas con la sociedad, al solo precio de conceder una mayor libertad para que se expresaran voces no regimentadas, que sin embargo, cuando se apartaban del libreto oficial —por ejemplo reclamando el abandono de la política económica liberal y la adopción de una "economía de guerra"— eran fácilmente descartadas.

La reacción fue sorprendentemente dura en Gran Bretaña, donde los pacifistas perdieron la discusión y triunfaron los sectores más conservadores, encabezados por la primera ministra Margaret Thatcher, que al igual que los militares aspiraba a utilizar una victoria militar para consolidarse internamente. De inmediato se alistó una fuerza naval de importancia, que incluía dos portaaviones y contingentes para el desembarco; el 17 de abril la Fuerza de Tareas se había reunido en la isla Ascensión, en el Atlántico, e iniciaba su marcha hacia las Malvinas; en torno de las islas se declaró una zona de exclusión, dentro de la cual se atacaría a cualquier fuerza enemiga.

Gran Bretaña obtuvo rápidamente la solidaridad de la Comunidad Europea, que se sumó a las sanciones económicas dispuestas por el Commonwealth, y el apoyo del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que votó una resolución declarando a la Argentina nación agresora y obligando al cese de las hostilidades y al retiro de las tropas. El poderoso bloque que apoyaba a los británicos apenas era contrapesado por el latinoamericano, ampliamente solidario en lo declarativo pero de poco peso militar, por una disidente simpatía de la Unión Soviética y por la actitud relativamente equidistante del gobierno norteamericano, que intentaba mediar entre sus dos aliados.

Sin respaldos consistentes, y aun ignorando sus reglas, el gobierno militar se lanzó al juego grande del Primer Mundo, suponiendo que, luego del hecho

consumado, la cuestión se resolvería por medio de una negociación, de modo que la reacción inglesa no sólo resultó inesperada sino impropia. Estrados Unidos, por medio del general Haigh, secretario de Estado, trató de encontrar una salida negociada y una fórmula transaccional. Propuso una retirada militar argentina y una administración tripartita conjunta con Estados Unidos, que permitiera restablecer las negociaciones. Ambas condiciones eran aceptables para el gobierno argentino si se le agregaba el compromiso a plazo fijo de reconocimiento británico de la soberanía sobre las islas —cosa inaceptable para los británicos—, pues el gobierno militar, dispuesto a transar en cualquier otro tema, no podía aparecer resignando aquello que había proclamado como su objetivo fundamental. Sólo así la operación podía ser presentada como una victoria ante la sociedad y ante la multitud que se reunía en la plaza, cuya magia ya habían experimentado los militares. En los términos en que ellos mismos habían planteado la operación, cualquier otro resultado equivalía a una derrota. Así, los gobernantes argentinos quedaron apresados por la movilización patriótica que ellos mismos habían lanzado, y los más prudentes debieron ceder ante las voces de los más exaltados.

Persiguiendo un objetivo imposible, el gobierno argentino fue víctima de un aislamiento diplomático creciente, que resultaba agravado por sus antiguos pecados, pues quienes le habían reprochado las violaciones a los derechos humanos consideraron, con razón, que esta aventura bélica, si resultaba triunfante, significaría convalidar todo su desempeño anterior. El envío de empresarios, sindicalistas y políticos al exterior para explicar la posición argentina no sirvió para modificar esto, y en muchos casos le dio a sus opositores una tribuna donde, defendiendo los intereses nacionales, hacían conocer sus críticas al gobierno.

El gobierno militar había intentado presionar a Estados Unidos utilizando los mecanismos de la Organización de Estados Americanos, y sobre todo el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que anteriormente Estados Unidos había empleado para alinear tras de sí a sus vecinos en sus conflictos contra el Eje o contra Cuba. Los países latinoamericanos mantuvieron su respaldo a la Argentina, pero la resolución que votaron a fines de abril fue lo suficientemente amplia y general como para no implicar un compromiso militar. Luego de un mes de intentar infructuosamente convencer a la Junta Militar, y en momentos en que empezaba el ataque británico a las islas, Estados Unidos abandonó su mediación; el Senado votó sanciones económicas a la Argentina y ofreció a Gran Bretaña apoyo logístico. Cada vez más solo, el gobierno argentino buscó aliados imposibles —los países del Tercer Mundo, la Unión Soviética y hasta Cuba— que lo alejaban definitivamente

de la ilusión de entrar al Primer Mundo. Mientras tanto, la batalla militar se acercaba inexorablemente.

En los últimos días de abril la Fuerza de Tareas británica, que había llegado a la zona de Malvinas, recuperó las islas Georgias. El 1º de mayo comenzaron los ataques aéreos a las Malvinas, y al día siguiente un submarino británico hundió al crucero argentino General Belgrano, ubicado lejos de la línea de batalla; con lo que la flota argentina optó por alejarse definitivamente del frente de combate. Siguió luego un largo combate aeronaval: la aviación argentina bombardeó la flota británica y le causó importantes daños, incluyendo un blanco perfecto de un misil teledirigido sobre el crucero Sheffield, que de alguna manera compensó el hundimiento del Belgrano, pero no la detuvo ni logró impedir que las islas quedaran aisladas del territorio continental. En ellas, los jefes militares habían ubicado cerca de 10 mil soldados, en su mayoría bisoños —por algún motivo, se prefirió destinar la tropa más entrenada a la frontera con Chile—, escasos de abastecimientos, sin equipos ni medios de movilidad, y sobre todo sin planes, salvo resistir. En Buenos Aires, la figura del Alcázar de Toledo, su heroica resistencia y la posibilidad de que se produjera algún cambio en el equilibrio de fuerzas en el mundo, ocupó el imaginario de los militares. En las islas, en cambio, sometidas a un demoledor ataque de artillería y aviones, las dudas fueron trocándose en desmoralización.

Un cambio similar se dio en la opinión pública, demorado en parte por la total manipulación de las informaciones, que además llegaban a un público dispuesto a creer que la Argentina estaba ganando la guerra. En medio del clima triunfalista empezaron a aparecer voces críticas: algunos hablaban en nombre de Estados Unidos y reclamaban contra una guerra y un alineamiento imposibles; otros, desde la izquierda, exigían profundizar los aspectos antiimperialistas del conflicto y atacar a los representantes locales de los agresores. En los actos de la CGT por el 1º de Mayo volvieron a alzarse las voces agrias, mientras que dentro del radicalismo, cuya conducción oficial había aceptado mansamente los términos de la cuestión puestos por el gobierno, Raúl Alfonsín, que dirigía el sector opositor, propuso la construcción de un gobierno civil de transición, que encabezaría el ex presidente Illia. Así, entre protestas crecientes por la falta de información, el tema del país luego de la guerra se instaló en la opinión pública, y reafirmó a los militares en su convicción inicial: no había otra salida que la victoria.

El 24 de mayo los ingleses desembarcaron y establecieron una cabecera de puente en San Carlos. El 29 se libró un combate importante en el Prado del Ganso, donde varios cientos de argentinos se rindieron. El 10 de junio Galtieri

pudo dirigirse por última vez a la gente reunida en la Plaza de Mayo, y dos días después llegó el papa Juan Pablo II, en parte para compensar su anterior visita a Inglaterra, en parte, quizá, para preparar los ánimos ante la inminente derrota. Antes de que finalizara su breve estadía, comenzó el ataque final a Puerto Argentino, donde se había atrincherado la masa de las tropas. La desbandada fue rápida y la rendición, prácticamente incondicional, se produjo el 14 de junio, 74 días después de iniciado el conflicto, que dejó más de 700 muertos o desaparecidos y casi 1.300 heridos. Los gobernantes convocaron al día siguiente al pueblo a la Plaza de Mayo, sólo para reprimir en forma extremadamente violenta a aquellos que, convencidos por los medios de difusión de que la victoria estaba cercana, no podían ni entender ni admitir la rendición. Por entonces, los generales exigían a Galtieri su renuncia.

La vuelta de la democracia

La derrota agudizó la crisis del régimen militar, planteada desde el descalabro financiero de 1981, e hizo públicos los conflictos hasta entonces disimulados. La cuestión de la responsabilidad de la derrota —que unos a otros se atribuían— se resolvió provisionalmente achacándola a los jefes operativos, aunque luego salieron a la luz fallas más sustanciales, que involucraban a los altos mandos; finalmente, el informe de una comisión investigadora, presidida por un general muy prestigioso, responsabilizó a la propia Junta Militar y la llevó a un juicio que, posteriormente, concluyó en la condena a los comandantes. En lo inmediato, las tres fuerzas no se pusieron de acuerdo sobre el sucesor de Galtieri, y aunque el Ejército pudo imponer a su candidato, el general Reynaldo Bignone, la Marina y la Aeronáutica se retiraron de la Junta Militar, creando una situación institucional insólita: un presidente designado por el comandante en jefe del Ejército. Quizá hubiera sido el momento para que un vigoroso movimiento civil desplazara a las Fuerzas Armadas, pero tal movimiento estaba lejos de existir, y el designado presidente logró afirmarse gracias a un consenso mínimo de las fuerzas políticas para un programa de reinstitucionalización sin plazos definidos. Pasado el momento más agudo de la crisis, se produjo una recomposición interna, se renovaron los comandos de la Armada y la Aeronáutica y se reconstituyó la Junta.

La salida electoral propuesta sirvió para calmar los reclamos de las fuerzas políticas. Pero el gobierno se proponía negociarla y asegurar que su retirada no sería un desbande. Se intentó lograr el acuerdo de los partidos para una serie de cuestiones, futuras y pasadas: la política económica, la presencia

institucional de las Fuerzas Armadas en el nuevo gobierno, y sobre todo una garantía de que no se investigarían ni actos de corrupción o enriquecimientos ilícitos ni responsabilidades en lo que los militares empezaban a llamar la "guerra sucia", con un eufemismo comparable al de "desaparecidos". Por entonces, todo ello empezaba a ser hecho público de manera casi sensacionalista por una prensa que había decidido olvidar la censura. Las aspiraciones militares se incluyeron en una propuesta, presentada en noviembre de 1982 y rechazada por la opinión pública en general y por los partidos, que convocaron poco después a una marcha civil en defensa de la democracia. La asistancia fue masiva y, casi de inmediato, el gobierno fijó la fecha de elecciones, para fines de 1983, aunque siguió buscando lo que constituía su objetivo fundamental: clausurar cualquier cuestionamiento futuro al desempeño pasado de los militares. Un documento final debía clausurar el debate sobre los desaparecidos, con la afirmación de que no había sobrevivientes y de que todos los muertos habían caído combatiendo; una ley estableció una autoamnistía, eximiendo a los responsables de cualquier eventual acusación.

Quizá la dirigencia política se hubiera avenido a un acuerdo que implicara correr un telón sobre el pasado y asegurar una transformación no traumática del régimen militar en otro civil, pero lo impidió tanto la movilización cada vez más intensa de la sociedad como la propia debilidad de las Fuerzas Armadas, corroídas por la creciente conciencia de su ilegitimidad y por sus propios conflictos internos. Quienes estaban al frente del gobierno y negociaban la reinstitucionalización eran incapaces de controlar el aparato represivo que habían montado —el que cobró algunas nuevas víctimas, que la sociedad, sensibilizada, registró con horror— y aun de asegurar que no serían derrocados por algún grupo de oficiales, porque de hecho las Fuerzas Armadas habían entrado en estado deliberativo, tanto acerca del pasado como del futuro. Los militares debían enfrentarse con la evidencia de su fracaso como administradores de un país desquiciado y como conductores de una guerra absurda, que los había llevado a luchar contra los que querían sus aliados y a unirse con un Tercer Mundo del que siempre habían desconfiado. Debían contemplar cómo sus antiguos aliados —los grandes empresarios, la Iglesia, Estados Unidos—, ganados por una nueva fe democrática, renegaban de los antiguos acuerdos, o cómo los otrora disciplinados jueces llevaban a los tribunales a oficiales acusados de distintos actos de corrupción. Sobre todo, debían enfrentarse con una sociedad que, después de años de ceguera, se enteraba de la existencia de vastos enterramientos de personas desconocidas, con seguridad víctimas de la represión, de centros clandestinos de detención, de denuncias realizadas por ex agentes, todo lo cual revelaba una

historia siniestra, de la que hasta entonces pocos habían querido enterarse. En esas condiciones, el intento de recomponer las antiguas alianzas, que había guiado al último gobierno de las Fuerzas Armadas, difícilmente hubiera podido fructificar.

Después de un largo letargo, la sociedad despertaba, y encontraban nueva resonancia voces que nunca se habían acallado, como la de los militantes de las organizaciones defensoras de los derechos humanos, y muy especialmente las Madres de Plaza de Mayo. Su incontestable manera de desafiar el poder militar se combinaba con una forma original de activismo, *luces, agua y viento*, farragosa que las tradicionales, que no inhibía otras pertenencias. Las marchas de los jueves, con escasa concurrencia en los años duros de la represión, se convirtieron luego de la guerra de Malvinas en nutridas "marchas por la vida", que identificaban con eficacia al enemigo con la muerte. Las organizaciones de derechos humanos no sólo colocaron la cuestión de los desaparecidos en el centro mismo del debate, poniendo a los militares a la defensiva, sino que impulsaron a toda la práctica política una dimensión ética, un sentido del compromiso y una valoración de los acuerdos básicos de la sociedad por encima de las afiliaciones partidarias que, en el contexto de las experiencias anteriores, era verdaderamente original.

A medida que la represión retrocedía y perdía legitimidad el discurso represivo —tan eficaz para la autocensura—, empezaron a constituirse protagonistas sociales de distinto tipo, algunos nuevos y otros que habían podido sobrevivir ocultándose. La crisis económica generó motivos legítimos y movilizadores: los impuestos elevados, los efectos de la indexación, la elevación de los alquileres, o las deudas impagas dejadas por una quiebra bancaria; y al reclamar y movilizarse cuestionaban tanto la política económica como la clausura de lo público. En otros casos era todo un pequeño fragmento de sociedad —un barrio, un pueblo— el que se organizaba sobre la base de solidaridades amplias tanto para reclamar —quizá con violencia, como en los "vecinazos" del Gran Buenos Aires a fines de 1982— como para buscar una solución a sus problemas al margen de las autoridades, bajo la forma de cooperativas, asociaciones de fomento o ligas de amas de casa. La nueva actividad de la sociedad se manifestaba también en los campos más diversos: los grupos culturales, como los que en Teatro Abierto organizaron desde 1980 la demostración de una vital cultura no oficial, convertida en verdadero acto político, los jóvenes que animaban grupos de trabajo en las parroquias, los que nutrían las multitudinarias peregrinaciones a Luján o los gigantescos recitales de rock nacional, que a su manera también resultaban actos políticos. El activismo renació en las universidades, al calor de los reclamos contra los cupos de ingreso o el arancelamiento, y en las

fábricas y lugares de trabajo, donde empezaron a reconstituirse las comisiones internas y a reaparecer la práctica de la participación sindical.

De alguna manera, la sociedad experimentaba una nueva primavera: el enemigo común, algo menos peligroso pero aún temible, estimulaba la solidaridad y alentaba una organización y una acción de la que se esperaban resultados concretos. Nuevamente, los conflictos de la realidad aparecían transparentes, y posible la solución de los problemas, si los hombres y mujeres de buena voluntad se organizaban en una fuerza consistente. Pero a diferencia de la anterior primavera, no sólo había un repudio total de la violencia o de cualquier forma velada de guerra, sino también menos confianza en la posibilidad de encontrar una gran solución, única, radical y definitiva, y menos seguridad de que el amplio conjunto de demandas planteadas definirían un gran protagonista, un actor único de la gesta, como lo había sido, por mucho tiempo, el "pueblo peronista". Precisamente los límites de este despertar de la sociedad se encontraron en la dificultad para agregar las demandas, integrarlas, darles continuidad y traducirlas en términos específicamente políticos.

En alguna medida, su integración debía darse también en la movilización sindical, que fue intensa: los sindicalistas sacaron la gente a la calle para reclamar contra la crisis económica y en favor de la democracia. A lo largo de 1982 y 1983 hubo una serie de paros generales y abundantes huelgas parciales, en las que se destacaron, por su nueva y aguijada militancia, los grupos estatales. Pero en verdad, los sindicalistas pusieron sus esfuerzos en la recuperación del control de los sindicatos intervenidos, la "normalización", que negociaron con el gobierno combinando la presión y el acuerdo. En esa estrategia concurren los dos grandes nucleamientos en que se encontraban divididos, más bien por razones tácticas, la combativa CGT de la calle Brasil, que encabezaba Saúl Ubaldini, y la negociadora CGT Azopardo. Su acción movilizadora fue perdiendo especificidad y confluyó en la lucha más general por aquello que concentraba las mayores ilusiones: la recuperación de la democracia.

La democracia fue en primer lugar una ilusión: la tierra prometida, alcanzada sin esfuerzo por una sociedad que, muy poco antes, adhería a los términos y opciones planteados por los militares. Luego del doble sacudón de la crisis económica y la derrota militar, la democracia aparecía como la llave para superar desencuentros y frustraciones, no sólo creando una fórmula de convivencia política sino también solucionando cada uno de los problemas concretos. Varias décadas sin una práctica real hacían necesario un nuevo aprendizaje de las reglas del juego, y también de sus valores y principios más

generales, incluyendo los que tenían que ver, más allá de la democracia, con la misma república. Fue precisamente ese conocimiento vago y aproximativo el que permitió que se encabalgaran en la nueva ilusión quienes nunca habían creído en ella, sobre todo los que estaban abandonando rápidamente el barco del Proceso. Pero se la aprendió con intensidad, y se la puso en práctica pronto. La afiliación a los partidos políticos —luego de que el gobierno levantó definitivamente la veda— fue tan masiva que uno de cada tres electores pertenecía a un partido. Las movilizaciones en defensa de la democracia recordaron por su número a las de diez años atrás, pero a diferencia de aquéllas no eran ni fiestas ni ejercicios para la toma del poder sino la expresión de una voluntad colectiva, el mostrarse y el reconocerse como integrantes de la civilidad. Esa diferencia se expresó también en los lugares de concentración elegidos: junto con la tradicional Plaza de Mayo, la de la República, el Cabildo o los Tribunales, indicador éste del papel central que, según se esperaba, debía cumplir la Justicia.

La afiliación masiva transformó a los partidos políticos. Hubo un amplio deseo de participación y se animaron los comités o unidades básicas, donde empezaron a volcarse las demandas de la sociedad. También se renovaron los cuadros dirigentes, y se incorporaron los que en los últimos años habían militado en organizaciones juveniles o estudiantiles, como en el caso de la Coordinadora radical, así como muchos intelectuales, que trajeron a la política nuevos temas —muchos surgidos de las inquietudes que estaba planteando la sociedad, y otros de la experiencia de las sociedades democráticas más avanzadas— y también formas más modernas de plantearlos. Los viejos cuadros dirigentes se vieron desafiados por otros que desde los márgenes habían planteado posiciones discrepantes, de modo que la renovación fue amplia e integral.

Las transformaciones del peronismo fueron notables, pues el viejo movimiento, siempre en tensión con la democracia, se convirtió en un aceptable partido. La cuestión del verticalismo, que había signado su existencia, quedó superada por la notoria falencia del vértice —Isabel Perón sólo ocupó simbólicamente la presidencia—, y la estructura partidaria pudo también absorber a los sectores con fuerte organización corporativa, como los sindicalistas. Las formas participativas fueron adoptadas para regular la competencia interna, y los modernos temas y preocupaciones democráticas, que nunca habían sido el fuerte del movimiento, aparecieron en forma razonable. La renovación, sin embargo, no fue completa: los viejos caudillos provincianos siguieron manteniendo un lugar importante, al igual que los dirigentes sindicales. El metalúrgico Lorenzo Miguel —el sucesor de Vandor, a quien los militares re-habilitaron a principios de 1983— volvió a conducir las 62 Organizaciones,